PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**JUICIO DE AMPARO 400/2026-V-A**

PERSONA QUEJOSA: ***** ***** ***** ***** *****
PERSONA TERCERA INTERESADA: ** ***
AUTORIDADES RESPONSABLES: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ORIZABA, VERACRUZ, Y OTRAS.
MATERIA: ADMINISTRATIVA.

**JUEZ**: DERIAN ORTEGA ARGUELLES.
**COLABORÓ**: EDUARDO HERNÁNDEZ AIZA. SECRETARIO.

**S E N T E N C I A.**

En fecha **veintidós de julio de dos mil veintiséis**, el **Juez Decimosexto de Distrito en Materia Mixta en Córdoba, Veracruz**, ha revisado los autos para resolver el juicio de amparo indirecto que se señala al rubro, promovido por la persona quejosa contra la autoridad Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, al estimar que el acto reclamado viola en su perjuicio sus derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

**R E S U L T A N D O:**

PRIMERO. Demanda. El **veintisiete** de **abril** de dos mil **veintiséis**, se recibió la demanda de amparo electrónica ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Córdoba, dirigido por razón de turno a este Juzgado judicial el veintiocho de abril del año en curso, promovida por ****** ***** ********* ********, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Veracruz, y otras autoridades.

SEGUNDO. Radicación y admisión. El veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se tramitó el presente expediente 400/2026, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado y se le dio intervención al Ministerio Público, y se señaló fecha señalada para la audiencia inicial.

TERCERO. Audiencia constitucional: Se encuentra señalada la audiencia constitucional para el día de hoy a las **once** horas con **tres** minutos del **veintidós** de **julio** de **dos mil veintiséis**.

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6620636a66330000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

## C O N S I D E R A N D O S

**Primero**. Análisis de la **competencia**. Este juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, y 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, por reclamarse actos de autoridad con ejecución en esta demarcación territorial.

**Segundo**. Análisis de la **oportunidad** de la demanda. En relación a las omisiones reclamadas, la presente se interpuso en el plazo general de quince días, lo que evidencia su temporalidad dentro del plazo previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, pues tuvo conocimiento de la infracción en dieciocho de abril de dos mil veintiséis, y presentó su demanda el veintisiete inmediato.

**Tercero**. **Fijación de los actos reclamados**. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice:

> ***ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO***. *El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en*

Versión Pública

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6626636a66330000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

*algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto[1].*

Así como, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto[s] reclamado[s], a saber:

*La inconstitucionalidad de los artículos del 129 al 140, que conforman el Capítulo II "De las Sanciones", de los artículos del 141 al 145, que conforman el Capítulo III "De los Procedimientos para la Aplicación de Sanciones", del Título VIII, "Administración De Faltas Al Reglamento", del Reglamento de Tránsito, Movilidad Urbana y Seguridad Vial, del H Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Ver, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.*
*b) De la Delegación de Tránsito Municipal y Coordinación de Policía Vialidad, así como del Oficial de Policía Vial, ****** ******* ******** *********, con número de personal 8032, reclamo:*
*- La imposición de la sanción consistente en multa, relativa a la boleta de infracción Folio 07733, del 18 de Abril del 2026;*
*- La imposición de la sanción consistente en la retención de la Tarjeta de Circulación, numero E-2119709;*
*- La multa excesiva, consistente en la imposición de dos sanciones, mismas que fueron descritas en los párrafos que anteceden, con motivo de la misma conducta;*
*- El registro de las sanciones aplicadas a que se refiere el artículo 119 del Reglamento de Tránsito, Movilidad Urbana y Seguridad Vial, del H Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Ver, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;*
*- La boleta de infracción, Folio 07733, del 18 de Abril del 2026.*
*c) De todas las autoridades responsables reclamo:*
*- La ejecución del Reglamento de Tránsito, Movilidad Urbana y Seguridad Vial, del H Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Ver, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y,*
*- Las consecuencias de hecho y de derecho.*

**Cuarto.** Análisis de la **existencia de los actos reclamados**. Son ciertos los actos reclamados, como se advierte de lo manifestado en sus informes, que

[1].*Registro digital: 181810.*

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6626636a66330000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

aunque en parte realizan manifestación negando los mismos, lo hacen valer respecto a la constitucionalidad de su emisión, más no de su inexistencia.

Lo cual además se corrobora con la publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz del Reglamento impugnado.

Dicha circunstancia está corroborada con las constancias que anunciaron y anexaron en su informe con justificación, mismas que este juzgador les reconoce **pleno** valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo.

Por ende, se tiene por plenamente probada la existencia del acto reclamado, y se procede al estudio de procedencia del juicio constitucional.

**Quinto. Causa de improcedencia infundada.**

Las autoridades ejecutoras señalaron que el juicio de amparo es improcedente, ya que previamente a acudir al juicio de amparo, la parte amparista debió promover el recurso de inconformidad, a efecto de modificar, revocar o nulificar las boletas reclamadas, en respeto al principio de definitividad.

**La causa de improcedencia es infundada.**

Al respecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio de amparo como una variante al principio de definitividad, en el supuesto de que contra el acto reclamado de tipo administrativo proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente.

Bajo ese contexto, debe destacarse que la persona quejosa no sólo reclama actos meramente legislativos, sino también actos formal y materialmente legislativos, ya que impugnó ordenamientos jurídicos que se combatieron en su carácter de naturaleza heteroaplicativa.

En ese tenor, contrario a lo que aduce la autoridad responsable, se actualiza una excepción al principio de definitividad, relativa a que no se obliga al

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706e6262636e6633000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

PJF - Versión Pública

gobernado a agotar los medios de defensa ordinarios, cuando se impugnen leyes, reglamentos o normas generales.

La razón de esta excepción se establece en función de que, en términos del artículo 107 fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto resulta procedente contra una norma que, por su sola entrada en vigor o, con motivo de su primer acto de aplicación, causen perjuicio a la parte quejosa. En consecuencia, dado el carácter con el que la parte quejosa combate las normas impugnadas (heteroaplicativa), ello hace evidente la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar medio de defensa alguno, toda vez que en la especie también se plantea su inconstitucionalidad como norma formal y materialmente legislativa, respecto de la cual la citada autoridad carece de competencia para examinar; de ahí lo infundada de la causa de improcedencia.

Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal del País de rubro siguiente:

> *PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTARLO CUANDO SE RECLAMAN DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EMITIDAS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.*

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6262636a6633000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

**Sexto. Estudio de fondo.** Son infundados en parte y fundados en otra los conceptos de violación formulados.

Previo al estudio de la litis planteada, es pertinente precisar que por razón de técnica, se analizará en primer lugar la inconstitucionalidad del Reglamento de Tránsito, Movilidad Urbana y Seguridad Vial para el Municipio de Orizaba, Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el once de septiembre de dos mil veinticuatro; y posteriormente, los actos de aplicación del mismo.

Sirve de apoyo al anterior razonamiento, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

> *LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE*

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*UN ACTO DE APLICACIÓN.*

En principio, cabe destacar que el servicio público de tránsito es la actividad técnica encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y circular por ella con fluidez, mediante la adecuada regulación de la circulación de peatones, animales y vehículos, que se presta genéricamente a toda la población sin que se determine individualmente a los usuarios, quienes disfrutan del mismo por medio de la semaforización y demás normas de señalamiento de la determinación del sentido de circulación vehicular en la vía pública para agilizar el tránsito vehicular.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sienta las bases generales del orden municipal, y destaca que el municipio libre es la plataforma sobre la cual descansa el régimen interior de los estados en cuanto a su división territorial, organización política y administrativa; además, establece la competencia, su forma de gobierno, la elección de sus representantes, así como la suspensión y desaparición de los ayuntamientos.

Dicha porción constitucional señala que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; del mismo se desprenden las facultades para aprobar -de acuerdo a las leyes en materia municipal que deban expedir las legislaturas estatales-, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen las administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. En tal aspecto, se observa que los municipios tienen a su cargo, diversos servicios y funciones públicas entre las que se encuentran la seguridad pública, la policía preventiva municipal y tránsito.

El orden jurídico constitucional tiende, además de establecer las reglas con base en las cuales deben ejercer sus funciones competenciales las autoridades de los demás órdenes normativos, a preservar la regularidad en dicho ejercicio, consistente en que éste se lleve a cabo dentro del marco de las atribuciones establecidas, sin nunca rebasar los principios rectores previstos en

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6262636a6633000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

PJF - Versión Pública

la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación de garantías individuales, o bien, afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico.

De lo anterior, se deduce que los Municipios tienen la facultad de emitir dentro de su jurisdicción, los reglamentos de observancia general atingentes a la organización de la administración pública municipal, los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

**Conceptos infundados.**

En ese sentido, lo relativo **a la normas impugnadas que prevén las sanciones y los procedimientos para su aplicación**, al regular cuestiones de tránsito local, en cuanto a la circulación de vehículos que inciden directamente en la fluidez de la circulación vehicular, así como en la seguridad vial de la cual disfrutarán todos los usuarios de las vías públicas, **no contraviene el orden constitucional debido a que, la regulación del servicio público de tránsito no se entiende implícitamente conferida al Estado como una facultad exclusiva, sino que está reservada para el Municipio**, y el Estado en esta materia puede, en su caso, emitir leyes o reglamentos que establezcan el marco normativo o den las bases generales para su regulación.

En efecto, el Estado emite las bases en materia de tránsito a través de la Ley, y el Ayuntamiento expide el reglamento respectivo a efecto de que, conforme a la realidad que se presenta en el municipio, organice la circulación de vehículos a fin de privilegiar su fluidez y la seguridad vial de la cual disfrutarán todos los usuarios de las vías públicas.

Sobre esto, el artículo 2° de la Ley de Tránsito para el Estado de Veracruz[2], prevé la posibilidad de que los Ayuntamientos ajusten sus reglamentos en la materia a dicha ley estatal, y contempla la prestación de servicio público de tránsito directamente o de manera coordinada con el Gobierno del Estado; en tal sentido, la emisión del Reglamento Municipal de Tránsito que se impugna, y la imposición de sanciones por desacato, no deviene

[2] *Artículo 2. Los Ayuntamientos aplicarán y vigilarán el estricto cumplimiento de esta Ley, por conducto de las unidades administrativas de tránsito y seguridad vial o su equivalente, y ajustarán a las disposiciones de la misma sus reglamentos en la materia. Podrán prestar el servicio público de tránsito directamente o de manera coordinada con el Gobierno del Estado.*

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6620636a66330000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Versión Pública

inconstitucional.

En efecto, la titularidad del servicio público de tránsito municipal implica que los municipios deben poder determinar, en su ámbito territorial, las normas relativas a la administración, organización, planeación y operación del servicio de tránsito, a fin de que éste se preste de manera continua, uniforme, permanente y regular, así como las normas relativas al sentido de circulación en las avenidas y calles, a las señales y dispositivos para el control de tránsito, a la seguridad vial, al horario para la prestación de los servicios administrativos y a la distribución de tareas entre las diversas autoridades de tránsito.

Bajo esa óptica, se considera que no es incorrecto que el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, prevea sanciones a los conductores que no respeten las reglas de tránsito, y que prevea mecanismos para su ejecución; por el contrario, el reglamento la clarifica y adecua a lo que estimó la realidad, entorno, territorio y condiciones en que se desarrolla ese municipio; y el artículo 115 Constitucional, y la ley estatal en mención, al establecer las bases generales de actuación de los Municipios, **prevé su facultad de regular en lo particular las demás cuestiones que se requieran para su eficaz organización y gobierno.**

Por ende, como **sistema normativo entrelazado, devienen constitucionalmente válidos los numerales 129 a 140 que conforman el capítulo de las sanciones**, así como los **artículos 141 al 145 que prevén los procedimientos para la aplicación de las sanciones** del **Reglamento de Tránsito, Movilidad Urbana y Seguridad Vial para el Municipio de Orizaba**, **Veracruz**. Lo que conlleva a **negar la protección constitucional** respecto a **dichos actos.**

**Máxime que de sus conceptos de violación no se advierte que impugne de manera concreta alguna disposición de las mencionadas, salvo el caso de la retención de la tarjeta de circulación, lo que será materia de análisis más adelante.**

Misma negativa del amparo que se debe realizar por lo que respecta al artículo 119 del Reglamento de Tránsito, Movilidad Urbana y Seguridad Vial del

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706e6262636e66330000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

PJF - Versión Pública

Municipio de Orizaba, Veracruz, dado que lo reclama como un dispositivo que prevé el registro de las sanciones aplicadas, lo que no guarda congruencia con el texto de la norma impugnada, pues versa sobre la integración de un patronato, lo que deviene inoperante en su impugnación en el amparo.

**Séptimo. Conceptos de violación fundados.**

El estudio de constitucionalidad planteado exige determinar si las normas generales municipales aplicadas al quejoso respetan los derechos humanos a la libertad de tránsito, debido proceso, seguridad jurídica, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva, reconocidos en los artículos 11, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Test de proporcionalidad sobre el artículo 141, fracción IV, del reglamento municipal** (retención de tarjetita de circulación como garantía).

El artículo 141, fracción IV, del Reglamento de Tránsito, Movilidad Urbana y Seguridad Vial para el Municipio de Orizaba, Veracruz, faculta a la autoridad vial a retener la tarjeta de circulación del automóvil al conductor infractor con el propósito manifestado de asegurar o garantizar el pago de la sanción pecuniaria imponible.

Para evaluar la constitucionalidad de dicha restricción a los derechos del gobernado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la metodología del Test de Proporcionalidad, el cual consta de cuatro etapas sucesivas, el cual se desarrolla a continuación:

A) **Fin constitucionalmente legítimo**: La retención de un documento habilitante busca asegurar la efectividad del cobro de los créditos fiscales derivados de las infracciones de tránsito y desincentivar la impunidad. El aseguramiento del cumplimiento de las sanciones administrativas constituye una finalidad que encuentra asidero implícito en la potestad recaudadora e imperativa del Estado (artículos 31, fracción IV, y 115 constitucional). En consecuencia, la medida tiene un fin constitucionalmente legítimo.

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6262636a6633000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

B) **Idoneidad**: La retención de la tarjeta de circulación resulta instrumentalmente apta para incentivar al conductor a presentarse ante la tesorería u oficina de tránsito a fin de liquidar la multa. Existe una relación de causalidad pragmática entre la privación del documento y la comparecencia del gobernado. Por lo tanto, supera formalmente la etapa de idoneidad.

C) **Necesidad**: **En este punto la norma resulta inconstitucional**. Para cumplir con el estándar de necesidad, la medida debe ser la menos lesiva entre todas aquellas que posean la misma eficacia. En el ordenamiento jurídico mexicano existen mecanismos de ejecución e instrumentos fiscales ordinarios (tales como el procedimiento administrativo de ejecución, el embargo de bienes, o la vinculación al padrón de contribuyentes) que permiten a la autoridad municipal cobrar créditos fiscales **sin necesidad de desposeer preventivamente al ciudadano de un documento oficial habilitante**.

Retener un documento personal emitido válidamente por una autoridad estatal (o de otra entidad federativa) como prenda o garantía sumaria resulta una medida excesiva y desproporcionada que violenta la presunción de inocencia e invade la esfera patrimonial del gobernado antes de que la sanción quede firme.

D) **Proporcionalidad en sentido estricto**: El grado de afectación al derecho a la libertad de circulación (artículo 11 constitucional) es de intensidad severa, dado que **inhibe el libre tránsito vehicular del individuo** o **lo expone a sanciones posteriores** por falta de documento. En cambio, el grado de satisfacción del interés público (el cobro sumario de una multa pecuniaria de menor cuantía) es reducido. La medida es desproporcional pues el mecanismo del artículo 141, fracción IV, resulta manifiestamente inconstitucional.

Derivado de lo anterior, es que debe **declararse la inconstitucionalidad del artículo 141, fracción IV, del Reglamento de Tránsito, Movilidad Urbana y Seguridad Vial para el Municipio de Orizaba, Veracruz**.

**Análisis de legalidad y fundamentación del acto de aplicación.** Boleta de infracción 07733.

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706e6262636e6633000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

PJF - Versión Pública

Aunado a la inconstitucionalidad de la norma citada con anterioridad, el acto concreto de aplicación adolece de vicios propios de inconstitucionalidad directa por violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal:

**Deficiencia en la tipicidad de la infracción**: El agente emisor citó como fundamento el artículo 34 del reglamento, relativo a la obediencia de los colores de semáforo, pero asentó textualmente como conducta “No obedecer señal de alto". Dicha imprecisión omite señalar las circunstancias exactas de modo, tiempo y lugar, si se trató de semáforo en rojo, disco restrictivo o indicación manual, imposibilitando la subsunción lógica entre la norma y el hecho imputado.

**Falta de individualización de la sanción** (violación al artículo 22 constitucional): Se aplicó de forma automática una multa equivalente a 10 UMAS (Categoría C) sin expresar la ponderación de los elementos mínimos de individualización: la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, la reincidencia o el riesgo efectivamente generado a la seguridad vial. La **aplicación autómata de tarifas o montos preestablecidos sin motivación individualizada torna a la multa en excesiva y arbitraria**.

Con base en lo anterior, como se dijo al inicio del presente estudio, resulta **fundado** el concepto de violación en análisis, pues se **demostró** la **inconstitucionalidad** del **artículo 141, fracción IV,** del Reglamento de Tránsito, Movilidad Urbana y Seguridad Vial para el Municipio de Orizaba, Veracruz, en términos del test de proporcionalidad realizado, así como la **inconstitucionalidad** del **acto** de **aplicación** consistente en la sanción de la multa efectuada; por ende, se impone **otorgar el amparo solicitado**.

**Efectos de la concesión de amparo.** Se impone otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables:

**1.** Desincorporen de la esfera jurídica del quejoso, lo dispuesto en el artículo 141, fracción IV, del Reglamento de Tránsito, Movilidad Urbana y

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6626636a66330000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Seguridad Vial para el Municipio de Orizaba, Veracruz; por lo tanto, ninguna autoridad podrá volver a aplicarlos en su perjuicio, mientras éste se encuentre vigente.

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

> *AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA*[3].

En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en el proceso legislativo de los artículos reclamados, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto de ejecución en cumplimiento al fallo protector.

**2.** Las autoridades ejecutoras, deberán dejar insubsistente el primer acto de aplicación, consistente en la multa con número de folio 07733, y realizar la devolución inmediata y sin pedimento de requisito adicional de la tarjeta de circulación retenida en garantía al gobernado.

**3.** Deberán devolver al quejoso el monto de la multa reclamada en caso de haberse realizado el pago correspondiente.

Finalmente, cualquier órgano del Estado que, de manera directa o indirecta, pudiese tener participación en el cumplimiento de este fallo protector de garantías estará obligada a su acatamiento, a pesar de no tener el carácter de autoridad responsable, en atención al aludido numeral 197 de la ley de la materia.

Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se:

**RESUELVE:**

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6262636a6633000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

PJF - Versión Pública

[3] *Registro digital: 192846.*

**PRIMERO.** La Justicia de la Unión **NO AMPARA** ni protege a ****** ***** ********* ********, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando **sexto.**

**SEGUNDO.** La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** a ****** ***** ********* ********, en contra del artículo 141, fracción IV del Reglamento de Tránsito, Movilidad Urbana y Seguridad Vial para el Municipio de Orizaba, Veracruz, por resultar contrario a los artículos 11, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo establecido en el considerando **séptimo.**

**TERCERO**. La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** al quejoso ****** ***** ********* ******** contra el acto de aplicación consistente en la boleta de infracción folio 07733, de fecha dieciocho de abril de dos mil veintiséis, así como de la retención de la tarjeta de circulación, conforme a lo establecido en el considerando **séptimo.**

**Notifíquese**.

**Información sobre la recurribilidad de las sentencias.**

Por último, hágaseles saber a las partes legitimadas que la presente sentencia es impugnable mediante **recurso de revisión**, el cual deberá interponerse por conducto de este Juzgado dentro del plazo de **diez días**, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación, en términos del artículo 86 de la Ley de Amparo.

Así lo resolvió y firma el Juez **Derian Ortega Arguelles**, del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Mixta con residencia en Córdoba, Veracruz, quien actúa con la persona secretario **Eduardo Hernández Aiza**, quien autoriza y da fe. Doy fe.

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6262636a6633000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Razón**: En la misma fecha, el secretario hace constar que se pasan los autos a la actuaría de este juzgado y que al expediente electrónico se ha incorporado el presente proveído; asimismo, se giraron los oficios **16758, 16759, 16760 y 16761**, al tenor de la minuta que se agrega.**Conste.**

En Córdoba, Veracruz, a las nueve horas del **veintitrés** de **julio** de **dos mil veintiséis**, notifico a las partes por medio de lista de acuerdos que se publica electrónicamente en el portal de internet del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación (www.oaj.gob.mx), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

El Actuario Judicial.

PJF - Versión Pública

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6626636a66330000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

***"2026, AÑO DE MARGARITA MAZA PARADA"***
***JUICIO DE AMPARO 400/2026***
***OFICIOS SENTENCIA***

**16758/2026 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ORIZABA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE)**

**16759/2026 JEFE DE LA POLICÍA VIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE)**

**16760/2026 AGENTE VIAL, ****** ******* ******** ********* (AUTORIDAD RESPONSABLE)**

**16761/2026 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO.**

POR VÍA DE NOTIFICACIÓN, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS DEL CASO, CON EL PRESENTE REMITO COPIA COTEJADA DE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL PRONUNCIADA EL DÍA DE HOY DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 400/2026, PROMOVIDO POR ****** ***** ********* ********, CONTRA ACTOS DE USTED.

**CÓRDOBA, VERACRUZ, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

**ATENTAMENTE**

**EL SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOSEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN CÓRDOBA**

**EDUARDO HERNÁNDEZ AIZA**

**(FIRMA ELECTRÓNICA)**

EDUARDO HERNANDEZ AIZA
706a6626636a66330000000000000000015266
27/04/29 12:05:57

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

# PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

## EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

**Archivo Firmado:**
**161500876_0936000041623271020.p7m**
**Autoridad Certificadora:**
**Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal**
**Firmante(s): 2**

| FIRMANTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre:** | EDUARDO HERNANDEZ AIZA | **Validez:** | BIEN | Vigente |

| FIRMA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No Serie:** | 70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.52.66 | **Revocación:** | Bien | No revocado |
| **Fecha (UTC/ CDMX)** | 22/07/26 20:41:59 - 22/07/26 14:41:59 | **Status:** | Bien | Valida |
| **Algoritmo:** | RSA-SHA256 | | | |
| **Cadena de firma:** | 5e 91 ba 1e 94 93 70 8c c8 32 a5 2f a1 5d c4 99<br>76 89 7c 8b a2 d7 b4 64 09 41 73 4a ea ad 52 e6<br>99 4c 76 61 d2 9f fc 97 28 b3 89 1e f1 05 b2 d3<br>3a 99 5e 74 c8 7a 2d 3f 9d c5 fd c7 73 20 0c 03<br>e3 8e c2 af 5b 4f 1b ca b1 db d0 ea 7e 24 1d 49<br>5c e1 99 e8 82 a7 1c b7 7a 37 59 49 7a 31 45 72<br>4c 06 97 e5 35 df 99 52 54 ff a5 0c 72 00 be d0<br>67 8e 3c 63 ed 31 e0 6f 48 9d 0c 82 cd 9f f0 5e<br>1c c2 c7 2a 1f bd 04 d3 5b c9 fc d1 94 62 2a 8d<br>9d 25 2e ca 6c 5d 97 5f 3c 68 d6 ec 5f 3b 31 5c<br>52 44 bc e3 b7 e5 6a 42 9c db 7e 46 68 63 72 2c<br>f1 cf e5 7d de 27 01 ec b2 4f e7 30 15 7c 42 f8<br>92 c3 99 f7 55 ba 3e c8 53 23 61 0e b5 94 0c 70<br>39 58 7c 7e 48 e2 f8 5a 83 5b 36 aa 83 f2 59 57<br>bf b8 51 6d 9a 6d 7e 39 59 a0 18 60 bc c0 a3 c1<br>69 e7 2e 36 e3 40 bb 5e 00 68 7a e9 73 b6 4f dc<br>24 f6 e6 f6 78 5f d1 24 7a a6 94 f7 48 03 04 60<br>28 f6 74 f1 ee 08 79 ad 46 d9 b1 32 9e 54 77 21<br>88 6b e9 3c 26 e0 67 53 b7 a8 cc 06 18 cb 1b 97<br>21 aa e9 a8 67 f3 8a 69 7c 03 e2 32 1d fd 23 06<br>a2 36 e0 93 8f b8 28 3d ef 7c ca 5f 74 de e5 16<br>bf 50 1a 7f 6a 11 7e 6e 49 d9 83 99 2e 3a 64 c4<br>60 b3 eb 94 83 8c 97 6b 43 32 8b 65 a0 6a 35 f5<br>da 80 88 10 12 4f fd 1a 48 9f 32 43 9a 93 6a 7c | | | |

| OCSP | |
|---|---|
| **Fecha: (UTC/ CDMX)** | 22/07/26 20:41:59 - 22/07/26 14:41:59 |
| **Nombre del respondedor:** | Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal |
| **Emisor del respondedor:** | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal |
| **Número de serie:** | 70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.52.66 |

| TSP | |
|---|---|
| **Fecha : (UTC/ CDMX)** | 22/07/26 20:41:59 - 22/07/26 14:41:59 |
| **Nombre del emisor de la respuesta TSP:** | Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal |
| **Emisor del certificado TSP:** | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal |
| **Identificador de la respuesta TSP:** | 184413262 |
| **Datos estampillados:** | dtjdFIOoe8ASPw776fZ/R48qSI4= |

PJF Versión Pública

# PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

| FIRMANTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre:** | DERIAN ORTEGA ARGUELLES | **Validez:** | BIEN | Vigente |
| **FIRMA** | | | | |
| **No Serie:** | 70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5b.ed | **Revocación:** | Bien | No revocado |
| **Fecha (UTC/ CDMX)** | 23/07/26 03:14:31 - 22/07/26 21:14:31 | **Status:** | Bien | Valida |
| **Algoritmo:** | RSA-SHA256 | | | |
| **Cadena de firma:** | 8f ec 6d 03 a4 bf bc b5 97 79 8f ef 10 13 26 00<br>e7 19 44 84 a7 f4 39 00 6a 1c 78 e9 24 9c 4f 57<br>f0 87 e7 c0 ee 4e 39 3e f2 24 4d 6e 1b 89 28 cf<br>45 77 75 02 d5 46 43 74 73 d0 26 4d 44 0b d6 76<br>bf a7 1d f6 bb 50 6c 0f 4c e8 c6 fa 55 d8 8e 2c<br>4c c6 1b 85 7f eb d8 24 26 8b 54 02 61 70 f7 c1<br>a7 40 22 67 f8 00 d4 35 00 1d 49 57 d9 04 d8 47<br>eb 82 96 d0 88 f8 18 8f 87 54 6f aa 00 54 39 e2<br>97 64 04 5d b3 89 6b 89 19 8d e8 6f d4 14 68 2f<br>3a 1a c0 ab 61 aa 07 98 88 65 b7 de 1c f2 ab f0<br>3d 81 7a 66 f1 50 d9 db c2 8c f6 e2 d9 93 e7 bb<br>65 61 11 14 cc f4 43 d5 e0 67 61 f0 5d f0 6d fe<br>fd 8b 7a dd d3 8a 6c 1f 7c 69 15 5d fb 69 73 59<br>0a 29 89 98 4b f2 2b 7a 1f e0 da 5f 61 d9 87 0d<br>ad a9 8b 37 4d 17 18 e0 21 5a 38 4e c5 da 14 ce<br>b4 4a 26 2f 27 48 94 9b e3 68 fb 2b 7e c3 3c ea<br>b1 69 38 a4 44 b3 11 49 fc 8b 1c 27 ef ed 29 7b<br>70 dc c7 46 4b 2f 9f 5c d3 17 13 9d e5 d3 26 e1<br>ed 2c 09 ac 25 ec 75 84 fe e6 03 44 86 77 1a e8<br>4e 77 c6 34 51 9b 23 26 53 c6 32 e8 0f 27 8e 44<br>99 c2 8d bf 8a 48 a4 91 9a 6a ee 34 dd 60 be 75<br>51 0f c6 30 a2 6a 4d eb cb c6 bc af 6e d0 e6 18<br>8b 58 ac 03 82 cd ca d7 c7 3b ef 70 3d 38 2c e5<br>55 cd 86 48 16 e5 77 4f ef 3b 36 29 c8 4e c5 37 | | | |

| OCSP | |
|---|---|
| **Fecha: (UTC/ CDMX)** | 23/07/26 03:14:31 - 22/07/26 21:14:31 |
| **Nombre del respondedor:** | Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal |
| **Emisor del respondedor:** | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal |
| **Número de serie:** | 70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5b.ed |

| TSP | |
|---|---|
| **Fecha : (UTC/ CDMX)** | 23/07/26 03:14:31 - 22/07/26 21:14:31 |
| **Nombre del emisor de la respuesta TSP:** | Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal |
| **Emisor del certificado TSP:** | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal |
| **Identificador de la respuesta TSP:** | 184520876 |
| **Datos estampillados:** | qA69BPszuhVm+VUv/HFMKE2IWoI= |

PJF - Versión Pública

El veintidos de julio de dos mil veintiseis, el licenciado Carlos Nieto Herrera, Secretario(a), con adscripción en el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.

PJF - Versión Pública